

San Miguel, a seis de abril de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RUC 2140349001-3, RIT O-63-2021, del Juzgado de Letras de Peñaflor, caratulados “Alvarado con Cantarero”, seguidos en procedimiento de aplicación general por despido indirecto y cobro de prestaciones laborales, por sentencia de diecisiete de febrero pasado se rechazaron las excepciones de pago parcial y compensación opuestas por la demandada y se acogió parcialmente la demanda, declarándose que el despido indirecto invocado por el trabajador con fecha 2 de agosto de 2021 se ajustó a derecho, concurriendo los requisitos del artículo 160 N° 7, en relación con el artículo 171 del Código del Trabajo, debiendo en consecuencia la demandada pagar al actor las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, ambas por las sumas que el fallo precisa; con el recargo legal del 50%; y con los reajustes e intereses reglados en los artículos 63 y 173 del referido código; se rechaza la demanda de nulidad de despido; y se condena en costas a la demandada.

La demandada recurre de nulidad en contra de ese fallo, invocando las causales contempladas en el artículo 477 del Código del Trabajo, por la hipótesis de infracción de ley con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, y en subsidio de esta, aquella del artículo 478, letra c) del mismo cuerpo legal, solicitando que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que rechace en todas sus partes la demanda por despido indirecto y cobro de prestaciones, con costas, y en caso de acoger dicha acción del demandante, dar lugar a las excepciones de pago parcial y compensación opuestas, con costas.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su vista el 1 de abril del actual, oportunidad en que se escucharon los alegatos de los apoderados de ambas partes.

Oídos los comparecientes y considerando:

1º) El recurso de nulidad laboral tiene la particularidad de ser un arbitrio procesal dirigido, según sea la causal que lo sustente, a velar por el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley.

Se trata de un recurso extraordinario, atendida la excepcionalidad de los presupuestos que configuran cada una de las causales previstas en los artículos 477 y 478 del código del ramo; característica que restringe el ámbito de revisión que tiene asignado el tribunal superior, en comparación al grado de conocimiento que es propio de la instancia. Estas particularidades se



traducen, además, en el deber que pesa sobre el recurrente de precisar con rigurosidad los fundamentos de las causales que invoca, como asimismo, su incidencia en lo dispositivo y las peticiones que efectúa;

I. Causal del artículo 477 del Código del Trabajo. Infracción de ley

2º) Por medio de esta causal de nulidad, el recurrente sostiene que la sentencia impugnada infringe lo dispuesto en los artículos 160 N° 7 del Código del Trabajo; 1545, 1560 y 1563 del Código Civil, y artículo 1393 también de este último código.

Para fundar esta causal, el recurso expresa que ambas partes se enteraron de la existencia de diferencias en el pago del aporte patronal a la cuenta individual del seguro de cesantía del actor y la prueba que indica refrendó que ello se produjo por un error cometido por la AFC Chile, al tener un registro erróneo de la fecha de inicio de la relación laboral, no obstante lo cual, el tribunal desestimó las alegaciones de su parte justificativas del error cometido, considerando que habría actuado negligentemente. Estima el recurrente que, al haberse acreditado la existencia de un error en la información entregada por la AFC Chile en relación con la fecha en la que la demandada debía dejar de efectuar el pago del aporte patronal a la cuenta individual del actor, si bien no elimina la existencia de un incumplimiento por parte del empleador, sirve para justificarlo, pues constituye una circunstancia extraordinaria, generada por un tercero, y hace que el incumplimiento no sea grave.

Según el recurrente, el sentenciador interpreta de manera errónea el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, pues se ha definido que el incumplimiento grave que precisa la norma debe cumplir con los requisitos de provocar la ruptura de la confianza entre empleador y trabajador, existencia de daño efectivamente producido, peligro provocado por la conducta, y en caso de conductas de gravedad menor, habitualidad de las mismas. Señala el recurrente que, de acuerdo a la prueba rendida en autos, estima que esos requisitos no concurrirían, en atención a que la falta que se imputa al empleador no le sería imputable, debido a la inexistencia de dolo o culpa de su parte, hecho reconocido en la sentencia al exponer que el no pago de las cotizaciones nace de un error que comete el sistema de recaudación y pago de las cotizaciones al fondo de cesantía, situación en la que el empleador no tuvo injerencia ni responsabilidad alguna.

Añade que tampoco se trató de un incumplimiento grave, pues no hizo imposible la continuidad de la relación laboral ni produjo perjuicio al actor, o lo puso en peligro, o fue conducta habitual del empleador.



En cuanto a la infracción de los artículos 1545, 1560 y 1563 del Código Civil, el recurso expresa que aquella se relaciona con el valor e interpretación que el sentenciador da al documento, no objetado, denominado “indemnización” y que constituye el fundamento de las excepciones de pago parcial y compensación opuestas por la demandada.

Según indica quien recurre, las declaraciones de los dos testigos que menciona y la del propio demandante sirven para aclarar el sentido y alcance de lo acordado en ese documento.

Sostiene que, contrario a lo que se concluye en el fallo, “estimamos que, del tenor del documento denominado ‘indemnización’ suscrito con fecha 19 de diciembre de 2012, se desprende, con toda claridad, que la finalidad que las partes tuvieron al momento de celebrarlo, fue la de adelantar el pago de la indemnización por años de servicio, a la que, eventualmente, podría tener derecho el trabajador”; conclusión que obtiene, conforme señala el recurso, del nombre del documento y de su contenido.

Afirma el impugnante que la infracción de las referidas normas del Código Civil se produce con la interpretación que hace la sentencia de la instancia de lo pactado por las partes en el aludido instrumento, considerándolo como una mera liberalidad, con lo que lo priva de los efectos que las partes claramente le han dado, según la intención manifestada de pagar uno y recibir el otro un adelanto de una futura indemnización por años de servicio.

A continuación, el recurso explica que la infracción al artículo 1393 del Código Civil dice relación con la causa que, de acuerdo al juez *a quo*, correspondería al motivo que tuvieron las partes, o más bien el empleador, para pagar la suma de \$6.688.000; causa que, además del tenor del mismo documento “indemnización”, se vería aclarada con las declaraciones de los dos testigos a los que alude y la declaración del actor.

Arguye el recurrente que, a diferencia de lo que se concluye en la sentencia, su parte estima que del tenor del documento en referencia se desprende con toda claridad que la finalidad que las partes tuvieron al celebrarlo fue la de adelantar el pago de la indemnización por años de servicio a la que podría tener derecho el trabajador; y añade que a dicha conclusión se llega con el nombre del documento y los términos de su redacción, del modo que describe. Insiste en que se trató de un pago por adelantado de futuras indemnizaciones por años de servicio, no una prestación entregada a título de mera liberalidad.

A lo último, el recurso agrega que no existe prueba alguna que avale la conclusión a que arriba el sentenciador, en el sentido que el demandado



hubiera regalado al demandante la suma de dinero señalada en el documento que se viene mencionando, por lo que se trataría de una conclusión basada en una presunción, pero que el artículo 1393 del Código Civil prohíbe.

Sobre la influencia sustancial de los errores en lo dispositivo del fallo, expresa que, de haberse interpretado correctamente las normas que se dicen infringidas, el tribunal debió establecer que el solo hecho de no pagar cotizaciones no implicaba necesariamente un incumplimiento grave, puesto que se produjo a consecuencia de circunstancias extraordinarias, las que fueron acreditadas, y por consiguiente se habría rechazado la demanda por despido indirecto; y si se hubiese interpretado correctamente el documento denominado “Indemnización”, se habría acogido la excepción de pago parcial o de compensación, descontando la suma de \$6.688.000 de la indemnización por años de servicio fijada en la sentencia, sin presumir que la causa de ese pago fue la mera liberalidad de parte del empleador;

3º) Como se sabe, la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo –en su extremo de infracción de ley- tiene un alcance estrictamente jurídico, pues persigue verificar que la ley haya sido entendida, interpretada y aplicada correctamente al caso concreto, esto es, a los hechos que se han tenido por probados, tal como se han dado por establecidos en la sentencia. Por ende, la impugnación y la subsecuente revisión por parte de este tribunal han de realizarse con estricta sujeción a tales hechos, sin agregar otros y, en particular, sin que pueda prescindirse, tampoco, de los que fueran determinados en el fallo. Dicho con otras palabras, tratándose de este motivo de invalidación, los hechos asentados en el proceso por el juez del fondo resultan intangibles en el estadio procesal de nulidad;

A. Denuncia de infracción del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo

4º) Para resolver este capítulo del recurso, es necesario poner de relieve que en la sentencia del grado quedó asentado que en la carta de notificación de término de contrato por el hecho del empleador, el demandante proporciona como fundamento la causal del artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, por el “No pago de mis cotizaciones por seguro de cesantía AFC Chile durante el período comprendido entre junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 2016 y enero del año 2017”, basado en “(...) lo señalado en el certificado de períodos no cotizados emitido con fecha 1 de agosto de 2021 por AFC Chile”; certificado –continúa el fallo- en el que consta “el no registro de cotizaciones por los períodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2016 y de enero a diciembre de 2017”.



Con base a ello, el sentenciador tiene por satisfechas las formalidades previstas en el artículo 162 del Código del Trabajo y, seguidamente, en cuanto a la gravedad del incumplimiento contractual, en el apartado undécimo expresa que la mora en el deber del empleador de deducir de las remuneraciones del trabajador y enterar las cotizaciones sociales se encuentra especialmente tratada en el referido artículo 162, lo mismo que con la facultad que tiene la Inspección del Trabajo para exigir su acreditación y sancionar con multa las infracciones relacionadas con su pago, denotando “la gran importancia que el legislador le da al cumplimiento de esta obligación legal que se incorpora al contrato de trabajo como uno de los derechos que favorecen al trabajador (...)”.

Luego, en el considerando décimo tercero, fija como hechos de la causa: 1.- Que a la fecha en que el trabajador se auto despidió, esto es el 2 de agosto de 2021, no se encontraban pagadas las cotizaciones de AFC respecto del período de junio a diciembre de 2016; y 2.- Que la demandada, a propósito de la recepción de la carta de auto despido, procedió al pago de dicha deuda previsional con fecha 26 de agosto de 2021.

En seguida, siempre en el camino para definir la gravedad del incumplimiento en mención, el considerando décimo cuarto describe la fuente legal del seguro de cesantía y concluye el juez del mérito: “(...) el incumplimiento del empleador que ha sido acreditado, resulta grave, aun cuando se trate solo de algunos meses dentro de una relación laboral extensa, y aunque se hayan pagado con posterioridad, en la medida que dichas cotizaciones son parte de la remuneración del trabajador, por lo cual el empleador está obligado a retener por mandato legal y enterarlas en la institución correspondiente, debiéndose tener además presente que el retardo en su solución puede tener consecuencias negativas para el trabajador, tanto en el acceso a prestaciones previsionales, como en la rentabilidad de cuenta individual de cesantía, lo que redundaría en un menor beneficio monetario”; y en el considerando décimo quinto, exponiendo los dichos de los dos testigos presentados por el empleador, el sentenciador expresa que “(...) no ha logrado dar una respuesta satisfactoria que justifique su incumplimiento a la obligación de retención que le asiste, en relación [a] los períodos no pagados y reclamados por cotizaciones de AFC, que a mayor abundamiento, no puede soslayarse el hecho que conoce la normativa legal que lo dispone (...), se verifica una negligencia por parte del empleador, quien debiendo saber que el trabajador no contaba con los once años de servicios, para rebajar el aporte respectivo, no intentó, a lo menos, verificar el problema que afectaba en dicha administradora de fondos de cesantía, a fin



de evitar que esta circunstancia de produjera, por lo cual, ha de establecerse que la parte demandada se sitúa en la hipótesis de la causal de caducidad de terminación del contrato de trabajo prevista en el artículo 160 N° 7 (...);

5º) Considerando lo expresado por el sentenciador y lo replicado a su respecto en el recurso de nulidad, esta Corte advierte que el empleador no discute el incumplimiento que se le atribuye, como tampoco el que solo completó el período no cubierto en las cotizaciones del seguro de cesantía del actor después de que recibiera la carta de despido indirecto que el trabajador le hizo llegar. Junto con ello, resalta a este tribunal que, más allá de su propia interpretación de la dimensión o envergadura que cabe asignar a ese incumplimiento, el recurrente no formula una argumentación emanada en la doctrina y la jurisprudencia capaz de neutralizar aquella que se asienta en el fallo.

Sobre el particular, para resolver el presente arbitrio, es pertinente recordar que la entidad o gravedad de esta clase de incumplimiento no es una cuestión que la ley entregue al solo entendimiento y discrecionalidad del intérprete, puesto que para ello el artículo 162 del Código del Trabajo se encarga de preceptuar los intensos efectos que se derivan para el empleador por inobservancias de esta clase, dejando en claro con ello “(...) que para el legislador laboral, el no pago de las cotizaciones de seguridad social por el empleador, sin importar la cantidad de periodos ni la magnitud del monto adeudado, es un incumplimiento que tiene la gravedad que el recurrente desconoce, ya que bajo esas circunstancias la terminación del contrato carece de efectos, en tanto el empleador no cumpla con su obligación de pagar tales cotizaciones” (ICA Santiago N° 419-2021 Laboral);

6º) Por consiguiente, es de concluir que no se observa el error de derecho de haber aplicado al caso *sub lite* la causal de caducidad del vínculo laboral prevista en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo;

B. Denuncia de infracción de los artículos 1545, 1560, 1563 y 1393 del Código Civil

7º) En lo que hace a este segundo capítulo del recurso de nulidad, es conveniente apuntar que al abordar el punto relativo a la efectividad de que la demandada hubiese pagado parcialmente la indemnización por años de servicio, en los fundamentos décimo séptimo a vigésimo segundo de la sentencia impugnada el resolutor del fondo se hace cargo de las excepciones de pago parcial y compensación opuestas por la demandada, esgrimiendo la celebración de un pacto con el demandante, a raíz de una solicitud de este último por un complejo momento económico por el que pasaba. Sobre el sustento de estas excepciones, el fallo analiza la prueba

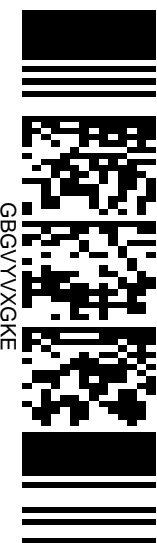


documental y confesional incorporada por la parte empleadora y concluye que no dan certeza de que dicho pago fuere realizado a título de un adelanto de la eventual indemnización por años de servicio a que tendría derecho el trabajador, razonamiento que el juez funda, tanto en el instrumento firmado ante notario denominado “Indemnización”, como en la cláusula quinta del contrato de trabajo, a lo que suma lo declarado por el actor al absolver posiciones, de todo lo cual desprende que “(...) efectivamente el dinero entregado corresponde a una bonificación efectuada por mera liberalidad, de parte del empleador”, con lo que rechaza la pretensión de pago, lo mismo que la de compensación también invocada por el demandado, considerando que no se comprobaron sus presupuestos según lo normado en el artículo 1655 del Código Civil, al no haberse acreditado alguna contraprestación de parte del trabajador que justifique la extinción recíproca de obligaciones hasta la concurrencia de sus valores;

8º) Ahora bien, en la medida que se invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, la única revisión que esta Corte puede efectuar atañe al juzgamiento jurídico del asunto, vale decir, al modo en que ha sido entendida y aplicada la ley al caso concreto.

La interpretación de los contratos está reglada en el Código Civil y, de acuerdo a sus dictados, se considera en su ejercicio la concurrencia de cuestiones de hecho y de derecho. Así, será un punto de derecho, si se reclama que el juez de la causa hizo prevalecer la literalidad de las palabras por sobre la intención de los contratantes, quebrantando el mandato del artículo 1560 del Código Civil. Sin embargo –y es lo que ocurre en la especie–, definir cuál ha sido esa intención, qué se propusieron las partes con el pacto, o cómo debe entenderse lo que estipularon, es una cuestión de hecho, pues descansa en el análisis y valoración de las probanzas, de manera que no resulta pertinente al caso la causal esgrimida en el recurso.

Con respecto a lo dicho recién, cabe considerar, además, que el razonamiento que lleva a un tribunal a definir el sentido y alcance de lo convenido entre personas que luego litigan entre sí precisamente en relación con ello, forma parte de la convicción del juzgador acerca de dicho asunto, componente consustancial a la valoración que está llamada a realizar la jurisdicción y que solo de manera excepcional se encuentra sujeta a un control por la vía recursiva extraordinaria, pero eso sí, por medio de alguna causal idónea al efecto, sin que lo sea esta primera que se analiza, toda vez que, como se dijo, presupone la aceptación de la valoración de la prueba y de los hechos extraídos de esta, de manera que el recurso de nulidad no habilita para volver a examinarlos;



9º) Atendido que lo pretendido por quien recurre va justamente en la línea de lo anotado en acápite inmediatamente anterior, es que las infracciones de ley no han quedado evidenciadas;

II. Causal del artículo 478 c) del Código del Trabajo

10º) En lo concerniente a esta segunda causal que funda el postulado de nulidad, se reclama, en lo central, que es errónea la calificación de incumplimiento grave de la falta de aporte patronal en que incurrió el demandado, toda vez que tuvo justificación en la información entregada por AFC Chile; circunstancia extraordinaria, generada por un tercero, que además es el encargado de la administración de los fondos de cesantía, y sin consecuencias negativas para el trabajador. Por ello –prosigue-, de haberse realizado una correcta calificación de los hechos, se debería haber rechazado la demanda de despido indirecto.

Asimismo, el recurrente acusa error al “establecer como la causa del pago de la suma \$6.688.000, la mera liberalidad del empleador”, en circunstancia de haberse tratado de un pago por adelantado de futuras indemnizaciones por años de servicio, no de una prestación entregada a título gratuito; por lo que de haberse calificado correctamente, el tribunal debería haber acogido las excepciones de pago parcial o compensación;

11º) Para abordar este motivo de nulidad invocado de modo subsidiario por el recurrente, es importante recordar que persigue una modificación en la calificación jurídica que ha hecho el tribunal de la instancia en relación a las conclusiones fácticas que su fallo asienta, las que permanecen inalteradas. No se trata de un error de derecho, sino de una errónea calificación jurídica de ciertas circunstancias que conducen a hacer regir, o no, un determinado concepto jurídico, verbigracia, un cometido específico, como se debate en la especie.

Bajo esa óptica, resulta pertinente traer hasta aquí lo anotado en supra 4º) y 7º) en relación con la causal de grave incumplimiento que fundó el auto despido y que se reafirma en el fallo cuestionado, así como de la causa del acto formalizado mediante el documento denominado “Indemnización” incorporado como prueba a la litis;

12º) A propósito de ese primer ámbito en que el recurrente hace gravitar el desacierto en la calificación jurídica que invoca, cabe reiterar lo que ya fue anotado en el párrafo final de supra 5º) y volver a recalcar sobre dicha base que el estándar normativo al que se atuvo el juez de la instancia para discernir si fue grave o no la inobservancia reprochada a la parte empleadora estribó en lo estatuido en el artículo 162 del código del ramo, en especial en las serias repercusiones que trae aparejada para la parte



patronal en caso de incurrir en el tipo de incumplimiento que allí se regula, proporcionando razones, entonces, para arribar a concluir que en el caso *sub lite* sí resultaba ajustado coincidir con el trabajador en la causal que señaló para auto despedirse, en las que enlaza aquel criterio encaminado en lo dispuesto en el artículo 162 con las particularidades del actuar del empleador que obtiene al analizar la prueba, y que califica de negligente.

El camino por el que discurre la motivación del juzgador tiene un sustento de orden fáctico y gira en torno a la conducta del demandado, colegida de la prueba rendida, y lo lleva a descartar el error inducido por un tercero por un mensaje que habría enviado al litigante en mención – circunstancia que no viene como hecho fijado en litis- y que este hizo valer como la justificación de haber dejado de pagar lo que en rigor procedía.

En su recurso, el demandado insiste en esa tesis excluyente de culpabilidad en el incumplimiento. Sin embargo, como se ha visto, la causal del artículo 478, letra c), igual que la principal, no admite que esta Corte dirija el pronunciamiento de nulidad en tal sentido, por escapar de la esfera de las facultades que le concede este arbitrio de derecho estricto, e impide que, sin atender, o más aún, sin modificar ese sustrato de hecho, este tribunal esté en situación de tildar de errónea la calificación jurídica en comento. Dicho con otras palabras, si el fallo acusa un actuar negligente de la parte empleadora y, al mismo tiempo, no sienta como un hecho las particularidades del señalado error de un tercero que habría desencadenado ese proceder, la causal de nulidad en comento no habilita a este tribunal para adentrarse a revisar ese sustrato de orden fáctico.

En suma, bajo ese prisma, esta Corte no puede más que concordar en que no es aceptable que el demandado pretenda excluir de gravedad a su falta de cumplimiento, desde que con ello afectó el derecho a la seguridad social que ampara al trabajador -elemento altamente valorado por el legislador laboral- a lo que cabe adicionar el contexto de hecho que se ha tenido por comprobado, en el sentido que el empleador fue negligente en su proceder, permitiendo con ello que la falta de pago se mantuviera y acrecentara. En consecuencia, se cumple con la premisa para configurar la hipótesis del artículo 160 N° 7 en alusión;

13°) Semejante a lo último es lo que pasa en lo tocante a la denuncia de error en la calificación jurídica del acto contenido en el documento llamado “Indemnización” al que se ha hecho referencia en párrafos precedentes. En efecto, y tal como se reseñó en el apartado 7°) de esta resolución al examinar si el fallo de la instancia quebranta la ley en lo referente a la causal invocada por el trabajador en la carta de auto despido,



este segundo capítulo subsidiario se apoya en los mismos presupuestos que han servido de base a aquel planteado por vía principal, por cuanto se funda –como puede apreciarse de la lectura del recurso- en un yerro al tener como simple liberalidad la transferencia de dinero reflejada en el instrumento titulado “Indemnización”, tantas veces aludido, y resulta que el fallo que se revisa descansa en la prueba documental y confesional, extrayendo nuevamente hechos que se oponen a tener por acreditado que aquel acto obedeció realmente al anticipo de una indemnización por años de servicio.

Sin embargo, según se ha visto, los antecedentes que dan el contexto factual que encauza esa determinación judicial no pueden ser controlados en esta sede extraordinaria. Por lo demás, lo que al demandado interesa es que la calificación de bonificación por mera liberalidad sea reemplazada por una que la catalogue como un pago a título de indemnización ordenada en la ley por los años trabajados, sin embargo para decirlo así la Corte tendría que superponerse al juez de instancia en la apreciación de la prueba, nuevo enfoque al que los términos en que se ha formulado el postulado invalidatorio no le dan acceso;

14º) Según lo que se ha expuesto, también deberá desecharse la segunda causal que sostiene el recurso, y con ello, al no haberse constatado los errores en los que se endereza el postulado de nulidad, por fuerza, habrá de ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **se rechaza**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el demandado Rafael Cantarero Basulto en contra de la sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, recaída en la causa RIT O-63-2021 del Juzgado de Letras de Peñaflor, sentencia que, por consiguiente, no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

Nº 89-2022 Laboral.-

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros ses señora Adriana Sottovia Giménez, señora M. Alejandra Pizarro Soto y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo, por encontrarse ausente.





GBGVYXGKE

Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros (as) Adriana Sottovia G., Maria Alejandra Pizarro S. San Miguel, seis de abril de dos mil veintidós.

En San Miguel, a seis de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

